

Bárceñas, Gürtel, Púnica, Bankia...  
amenazan con amargarle la campaña a Rajoy

## LOS 'AGUJEROS NEGROS' DEL PP

El PP ha tomado la recuperación económica por bandera para encarar un año electoral decisivo. Así lo reconoce la formación y así ha comenzado la campaña, exhibiendo las cifras de empleo y crecimiento para combatir la abstención. Sin embargo, los mayores casos de corrupción que afectan al partido permanecen latentes amenazando con desbaratar sus planes. Las declaraciones de Bárceñas sobre la contabilidad B, el desfile de imputados de Bankia ante la Audiencia Nacional, las pesquisas en el *caso Gürtel* sobre un supuesto pago ilegal para financiar la campaña electoral de Cospedal en 2007 o las ramificaciones de la *trama Púnica* en la Comunidad de Madrid preocupan a los conservadores que, ante la proximidad de su cita con las urnas, temen que las investigaciones judiciales no les permitan recuperar a tiempo la confianza de sus electores.

Por Virginia Miranda

**E**l Partido Popular lo tenía todo dispuesto para que la Convención Nacional celebrada en Madrid los días 23, 24 y 25 de enero fuera un éxito. Ministros, presidentes autonómicos y alcaldes de capitales de provincia, además de otros muchos cargos de la formación, tuvieron ocasión de lanzar en las plazas en torno a las que estuvo organizado el cónclave el mensaje de lo conseguido por Mariano Rajoy en sus tres años de Gobierno y de lo que le queda por hacer. El resultado fue el esperado. Incluso tuvieron capacidad de respuesta a la desafección con la que José María Aznar trató en su discurso a su sucesor arrojando en sucesivas declaraciones al líder.

Sin embargo, y a pesar de que su nombre no apareció en ninguna de ellas, Luis Bárceñas planeó durante tres días por el Palacio Municipal de Congresos. Tras abonar una fianza de 200.000 euros salió de la cárcel la víspera del comienzo de la convención y, a escasas horas de su inauguración y tras fichar en la Audiencia Nacional —ha de hacerlo los lunes, miércoles y viernes—, lanzó

**Lo que pueda contar el  
extesorero y las  
pruebas que tenga son  
fuente de  
preocupación**



La estrategia de defensa de Bárceñas genera inquietud. F. MORENO



Rajoy se enfrenta a un año electoral en el que las investigaciones

algunas bombas sobre las cabezas de los populares: dijo que “cómo no va a conocer la contabilidad del Partido Popular el señor Rajoy si recibía un sobre que le entregaba [el que fuera tesorero] Álvaro Lapuerta directamente en su despacho en Génova y se lo llevaba al Ministerio cuando era ministro”, que “las responsabilidades las tenemos que asumir todos” o que la caja B “no son los papeles de Bárceñas, son los papeles del Partido Popular”, porque “ni yo pago las obras de Génova ni soy yo el que dona a la fundación Humanismo y Democracia”. “Soy generoso, pero no tanto”, llegó a bromear.

Lo que pueda o no contar el extesorero del PP a partir de ahora y, sobre todo, las pruebas que de ello tenga, es fuente de preocupación. Porque si bien asegura no tener previsto nada como la documentación de la que ha hablado “mi buen amigo Raúl del Pozo”, periodista que en *El Mundo* que ha contado algunas claves del caso y ahora refiere la existencia de “mochilas con grabaciones, vídeos, cuentas y talones” en poder de “tres incondicionales de Bárceñas”, no sería la primera vez que se desdice el que también fuera senador popular; sin ir más lejos, los apuntes contables que en un principio ne-



judiciales que afectan al Partido Popular estarán latentes y arrojarán novedades.

F. MORENO

gó. El periódico de Unidad Editorial, que desató el caso de los papeles de Bárcenas, asegura que quien fuera responsable de las finanzas del partido conservador durante casi dos décadas como gerente y tesorero ha confesado a su entorno tener conversaciones grabadas con Mariano Rajoy y con Javier Arenas, vicesecretario general de Política Autonómica y Local, que según habría dicho acreditarían “la financiación ilegal de la campaña del PP para los comicios generales de 2011”. Incluso habría hecho extensiva esta acusación al PP de Madrid presidido por Esperanza Aguirre. La semana pasada, de nuevo a las puertas de la Audiencia Nacional y después de que la dirigente regional pidiera explicaciones a Bárcenas sobre su dinero en cuentas suizas durante una entrevista en Antena 3, éste contestó que “una presunta delincuente podría ser ella, que tendría que dar muchas explicaciones sobre muchas cosas que han hecho en la regional de Madrid”.

En el Partido Popular la consigna parece ser la de ‘no hay mayor desprecio que no hacer aprecio’. En la entrevista concedida a Telecinco la pasada semana, Mariano Rajoy dijo que “ni yo ni los dirigentes del partido

## A pesar de los casos que comprometen al Gobierno de Madrid, Ignacio González podría ser candidato



La ‘trama Púnica’ se enreda ahora en el Gobierno de González.

F. MORENO

que conozco tenían la más remota idea sobre esto. A lo mejor era la contabilidad de alguien; la del PP, nunca”. En cualquier caso, aseguró que se niega a “estar todo el día debatiendo con el señor Bárcenas”. Y así ha sido; la mayoría del grupo popular en el Congreso ha vetado la petición del PSOE, Izquierda Plural y el Grupo Mixto para que el presidente compareciera en el pleno de la cámara y explicara la supuesta financiación irregular del partido que se apunta en los sumarios *Gürtel* y *Bárcenas*, alegando que ha quedado demostrado que el partido y su presidente no sabían de “los tejemanejes” de Bárcenas, al que acusa de “robar”.

A pesar de la apariencia de normalidad ante un caso donde el extesorero del PP acumula peticiones de prisión de 42 y 62 años de cárcel de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, respectivamente, y donde Anticorrupción dice que el PP ha de responder como partícipe a título lucrativo de los delitos investigados, dirigentes populares asisten preocupados a las consecuencias electorales de todo ello por encontrarse a expensas de la estrategia de defensa de Bárcenas y del final de la instrucción de *Gürtel*.

Porque no solo se trata de los sobres con dinero o de la reforma de la sede nacional de la formación conservadora y que, según Pablo Ruz, se pagó en parte con dinero negro —el PP ha negado en reiteradas ocasiones ambos extremos—; el asunto salpica a comunidades autónomas donde para el PP resulta clave revalidar su victoria en las elecciones del 24 de mayo.

Es el caso de Castilla-La Mancha, donde el juez de la Audiencia Nacional investiga la adjudicación presuntamente irregular de un contrato de basuras en Toledo por la que su exalcalde, José Manuel Molina, está imputado, y que Bárcenas relaciona con la financiación de la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en 2007. La presidenta autonómica y secretaria general del PP, que siempre ha negado la acusación, se enfrenta a la posibilidad de que las novedades judiciales surjan en plena campaña habida cuenta de que Ruz se encontraba ya en octubre ultimando las diligencias antes de decidir si remite la instrucción del asunto al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tras establecer el grado de participación de posibles aforados en los hechos.

Madrid y la Comunidad Valenciana, los dos feudos populares donde, según las encuestas, el PP tiene serias dificultades para revalidar su mayoría absoluta, también son dos de las autonomías donde los casos de corrupción tocan más de cerca a la formación conservadora. *Gürtel*, que se llevó por delante a los alcaldes de las localidades madrileñas de Majadahonda, Guillermo Ortega, y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, o al consejero regional, Alberto López Viejo, se lo ha puesto difícil a Esperanza Aguirre, que expulsó a los imputados tras el estallido del caso pero que, de ser ella quien finalmente encabece la lista del PP al Ayuntamiento de la capital, no podrá evitar en campaña que el resto de partidos centren su estrategia de oposición en que fue bajo su mandato cuando la red de Francisco Correa consiguió más de 300 contratos con la Comunidad de Madrid.

La *trama Púnica*, que también ha tocado de cerca a Aguirre porque el principal imputado es quien fuera su número dos como secretario general del PP regional, Francisco Granados, en estos momentos plantea mayores disgustos en la sede del Gobierno presidido por Ignacio González: hace unas semanas, *El País* publicaba que existen grabaciones y declaraciones ante el juez que involucran a su número dos, Salvador Victoria, en la trama de adjudicación de servicios públicos a cambio de comisiones ilegales; concretamente, la información se refiere a la orden que habría dado para pagar a uno de los empresarios detenidos en la operación.

Desmentida la noticia de manera tajante por Victoria, la investigación judicial supone en todo caso un reto para Mariano Rajoy. Al cierre de esta edición, la idea más extendida en las filas populares es que el presidente no se reserva ningún as en la manga y Aguirre y González serán cabezas de lista del PP al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Si la noticia se confirma este mes —el diputado y portavoz del comité de campaña del PP, Pablo Casado, declaraba en Telemadrid el pasado jueves que “la fecha es el 10 de febrero” para luego desdecirse asegurando que “no tiene que ser necesariamente” ese día—, ambos candidatos tendrán difícil esquivar las consecuencias que en campaña puedan tener las novedades que arrojen las instrucciones de Pablo Ruz y Eloy

Velasco en la Audiencia Nacional. Y a pesar de ello, el presidente, de confirmarse los nombres de los candidatos, se la jugaría. Según fuentes cercanas, porque le da una importancia relativa al efecto que puedan tener los casos de corrupción en las urnas mientras pueda vender que la economía empieza a ir bien.

Otro tanto de lo mismo ocurriría en la Comunidad Valenciana. Su presidente, Alberto Fabra, se encuentra en circunstancias

## Dirigentes ‘populares’ confían en que Rajoy tenga razón y la recuperación tape los ‘agujeros negros’



'Gürtel' puede cruzarse en la campaña de Fabra.

F. MORENO

similares a las de sus colegas madrileños. Casi apurando el plazo de designación de candidatos ha logrado que su prometida ‘tolerancia cero’ contra la corrupción depurara el grupo popular en las Cortes autonómicas el 2 de enero, cuando renunciaron a su acta Ricardo Costa y Yolanda García, los dos últimos imputados que permanecían en su escaño después de haber llegado a ser una decena. Sin embargo, si finalmente resulta designado como cabeza de lista, no podrá evitar que las instrucciones judiciales se cuelen en la cam-

paña. Lo que deparen las de casos como *Brugal* se da por amortizado tras la dimisión de quien fuera alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a finales de diciembre. Pero *Gürtel* son palabras mayores. Incluso a pesar de que los hechos investigados ocurrieron antes de que Fabra tomara posesión de un cargo que su antecesor, Francisco Camps, se vio obligado a abandonar a consecuencia de la trama de corrupción.

Si tal y como se viene diciendo desde que el Consejo General del Poder Judicial sacara a concurso la plaza que ocupa en la Audiencia Nacional Ruz consigue finalizar la instrucción antes de abandonar la plaza que ocupa en comisión de servicios en marzo, la precampaña se puede enredar con los contratos firmados por la Generalitat con las empresas de Francisco Correa con motivo de la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006. En la Comunidad Valenciana también tienen la vista puesta en el juicio por el caso *Terra Mítica*, que comienza en marzo, o el señalamiento del caso *Emarsa*.

A todos estos casos se sumaba la semana pasada la imputación de 78 titulares de tarjetas B de Caja Madrid y Bankia y la citación, de momento, de 27, todos ellos del consejo de administración de la entidad, para que respondan por los presuntos delitos de apropiación indebida o administración desleal. Si atrás quedó la declaración el pasado octubre de Rodrigo Rato, las de Estanislao Rodríguez Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda en el Gobierno de José María Aznar, o el exsecretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, que desfilarán por la Audiencia Nacional para declarar ante el juez, Fernando Andreu, el 17 de febrero, vendrá a recordar un asunto especialmente sensible entre los votantes, el de los desmanes de las cajas de ahorros, en un momento particularmente delicado para el PP.

Porque aunque ha salpicado a todos los partidos políticos y agentes sociales, desde sus filas se reconoce que casos como éste han puesto en cuestión el sistema dando alas a Podemos. Por eso, sin dejar de tentarse la ropa, confían en que Rajoy tenga razón y los primeros signos de recuperación económica sean suficiente remedio para tapar los agujeros negros que les salgan al paso durante un ciclo electoral crucial para el PP. ●